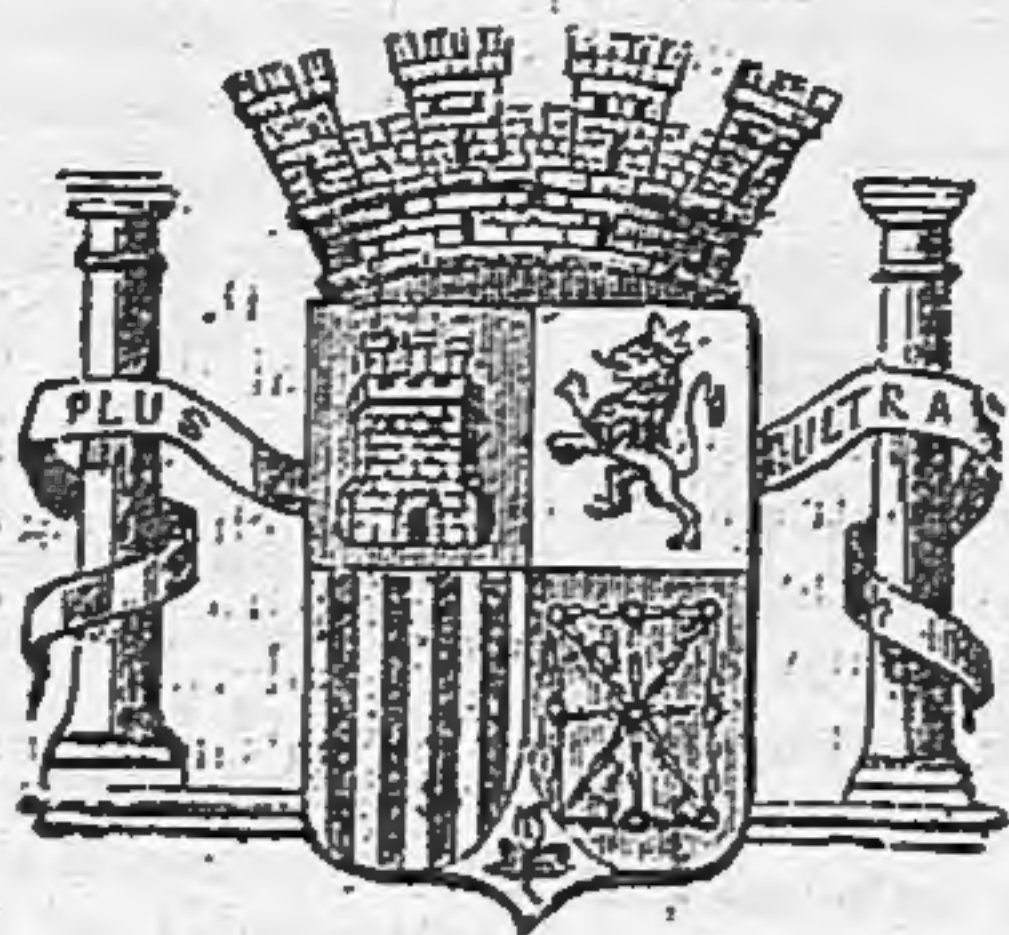


Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 23 de Noviembre de 1837.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense, por trimestres, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.

SE PUBLICA los martes, jueves y sábados de cada semana.

SE SUSCRIBE en esta capital, Imprenta de D. Gregorio Rionegro Lozano y C.^a, Plaza del Hierro núm. 3.—En las demás provincias, en las principales librerías.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en la noche de ayer me dirije el telegrama siguiente:

“Ministro Gobernación á Gobernadores. Resultado de la votación de Rey. Duque de Aosta 191. La República federal 60.

Duque de Montpensier 27.

Papeletas en blanco 19.

Duque de la Victoria 8.

La República española 2.

Alfonso de Borbon 2.

La duquesa de Montpensier 1.

Mayoría legal 173.

La tranquilidad inalterable en Madrid.”

Lo que he creído conveniente publicar en este periódico oficial para que llegue á noticia de los habitantes de esta provincia el fausto acontecimiento que pone feliz término al período de interinidad por que viene atravesando

do el país. Orense Noviembre 17 de 1870.—El Gobernador, José Casal.

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE LA CORUÑA.

D. José María Patiño, abogado del ilustre colegio de esta capital; Auditor honorario de Marina, jefe también honorario de Administración, benemérito de la patria, comendador de la orden americana de Isabel la Católica, caballero de la de Carlos III, condecorado con la cruz de valor y constancia, la placa de la Milicia Nacional y otras de distinción, Relator decano de esta Audiencia con la categoría de Magistrado y Secretario de gobierno de la misma.

Certifico que en la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 30 de octubre último, se publica el decreto disponiendo la provisión de las Secretarías de gobierno de las Audiencias de la Península en concurso de Relatores y las convocatorias para los que quieran mostrarse aspirantes, cuyo tenor es el siguiente:

Ministerio de Gracia y Justicia.—Decreto.—Como Regente del Reino, á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar:

Artículo 1.º Los cargos de Secretario de gobierno del Tribunal Supremo y de las Audiencias y el de Vicesecretario del Tribunal Supremo, creados por los artículos 512 y 517 de la ley provisional sobre organización del poder judicial, tendrán las siguientes dotaciones:

La Secretaría de gobierno del Tribunal Supremo, 8.500 pesetas.

La Secretaría de gobierno de la Audiencia de Madrid, 7.500 pesetas.

Las Secretarías de gobierno de las demás Audiencias, 6.000 pesetas.

La Vicesecretaría de gobierno del Tribunal Supremo, 6.000 pesetas.

Art. 2.º Por la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia se procederá á anunciar las vacantes de las Secretarías de gobierno de todas las Audiencias para ser provistas en concurso de Relatores de las mismas y del Secretario de la Sala cuarta de la Audiencia de Madrid, que acrediten tener los requisitos prevenidos en el art. 109 de la mencionada ley.

Art. 3.º La Junta de gobierno de la Audiencia á que corresponda la vacante, pedirá el correspondiente informe sobre las circunstancias de los aspirantes á las

Juntas de gobierno de aquellas en que se hallen sirviendo como Relatores y hará las demás investigaciones necesarias para que conste la aptitud de aquellos con arreglo al mencionado art. 109 de la ley, proponiendo en terna los aspirantes que considere mas dignos al Ministro de Gracia y Justicia en el término de un mes de las Palmas y de quince días las demás, á contar desde que se haya extinguido el señalado en la convocatoria.

Art. 4.º Los que fueren nombrados Secretarios de gobierno de las Audiencias en virtud de lo dispuesto en este decreto habrán de acreditar ante la Junta de gobierno de la Audiencia respectiva en el término de un año, á contar desde la fecha de su nombramiento, ser perito en taquigrafía, pudiendo ser libremente separados del cargo los que así no lo hicieren; cuidando al efecto los Presidentes de las Audiencias de poner oportunamente en conocimiento del Gobierno si los mencionados Secretarios cumplieron ó no lo dispuesto en este artículo.

Madrid 29 de octubre de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

Subsecretaría.—Se halla vacante y habrá de proveerse por concurso la Secretaría de gobierno de la Audiencia de Madrid, con el sueldo de 7.500 pesetas.

Para ser nombrado para este cargo se requiere: ser Relator de Audiencia en propiedad ó Secretario de la Sala cuarta de la de Madrid, y tener las circunstancias prevenidas en el art. 109 de la ley provisional sobre organización del poder judicial.

Los aspirantes habrán de presentar en el término de un mes desde la publicación de la convocatoria en la Gaceta de Madrid las solicitudes al Presidente de la Audiencia de esta capital, acompañadas de los documentos siguientes:

Primero. Certificación del título de Relator en propiedad ó de Secretario de la Sala cuarta de la Audiencia de Madrid.

Segundo. Declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos de incompatibilidad establecidos en los artículos 114 y 117 de la ley.

Madrid 29 de octubre de 1870.—El Subsecretario, Manuel Leon Muncasi.

Se hallan vacantes y se proveerán por concurso las Secretarías de gobierno de las Audiencias de Alhacete, Barcelona, Burgos, Cáceres, Coruña, Granada, Oviedo, Palma, Palmas, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, dotadas cada una con 6.000 pesetas anuales.

Para ser nombrado para estos cargos se requiere: ser Relator de Audiencia en propiedad ó Secretario de la Sala cuarta de la Audiencia de Madrid y tener las circunstancias prevenidas en el art. 109 de

la ley provisional sobre organización del poder judicial.

Los aspirantes habrán de presentar sus solicitudes al Presidente de la Audiencia á que corresponda la vacante en el término de dos meses para la Audiencia de las Palmas, y de un mes para las demás, á contar desde la inserción de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid, acompañando además los documentos siguientes:

Primero. Certificación del título de Relator en propiedad ó de Secretario de la Sala cuarta de la Audiencia de Madrid.

Segundo. Declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos de incompatibilidad establecidos en los artículos 114 y 117 de la ley.

Madrid 29 de octubre de 1870.—El Subsecretario, Manuel Leon Muncasi.

Y para su inserción en los Boletines oficiales de este territorio en cumplimiento de lo mandado por el Ilmo. Sr. Presidente de esta Audiencia, expido la presente en la Coruña á 9 de noviembre de 1870.

—José María Patiño.

ANUNCIOS OFICIALES.

ADMINISTRACION ECONOMICA

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

En cumplimiento de lo dispuesto por las instrucciones vigentes se sacan en arrendamiento público por frutos del año pasado de 1869 las rentas forales y demás derechos del Estado en esta provincia, excepto las pensiones de vino, correspondientes á los partidos que se dirán.

La subasta se celebrará el día 11 del próximo Diciembre de once á doce de su mañana en el despacho del Sr. Jefe económico de la provincia, ante su autoridad y con asistencia del Sr. Jefe de intervención y Escribano de este juzgado, verificándose igualmente en dicho día y hora en las casas consistoriales de los pueblos que constituyen cabeza de partido, sin exceptuar los suprimidos de Allariz y Viana, ante el Sr. Alcalde, Regidor síndico y Jefe de Escribano, y en la Corte en la Administración económica de dicha provincia entendiéndose esta triple subasta respecto de las rentas cuyo tipo excede de 5.000 pesetas, y no pasando de esta suma, en esta capital y en los partidos simultáneamente; quedando pendiente el remate de aprobación de la Dirección general del ramo.

La licitación se hará separadamente por cada uno de los partidos administrativos y se admitirán posturas por pliegos cerrados á todos los interesados, estando de manifiesto los presupuestos con las

cantidades que a continuación se expresan:

PARTIDOS.	Cantidades — Ps. Cs.
Allariz.....	10.035.11
Bande.....	1.370.32
Celanova.....	3.321.51
Carballino.....	3.898.27
Ginzo.....	1.338.71
Orepe.....	3.628.72
Ribadavia.....	2.018.56
Trives.....	0.872.24
Valdeorras.....	939.13
Verin.....	2.011.64
Viana.....	698.87
Total.....	35.866.81

Modelo de proposición.

D. N..., vocino de..., se obliga a tomar en arriendo las rentas forales que administra el Estado, correspondientes a frutos del año de 1869 en el partido de..., en la cantidad de... (en letra) con sujeción al pliego de condiciones formado por la Administración económica de la provincia de Orense, en virtud del cual se ha entregado en la Caja de Depósitos de esta provincia la cantidad de... pesetas, que proviene la instrucción, según lo acredita la carta de pago adjunta.

(Fecha y firma.)
Pliego de condiciones para la subasta en arrendamiento de las rentas forales y demás derechos que administra el Estado en esta provincia por frutos del año pasado de 1869.

1.º El remate se celebrará el día y hora que se cita, el cual será triple y simultáneo en esta capital, en los partidos de..., y en la Corte si la cantidad del tipo excede de 3.000 pesetas, y sino pasa de esta suma se verificará en esta capital y en los partidos solamente, quedando pendiente el remate de aprobación de la Dirección general.

2.º Las proposiciones se harán por pliegos cerrados, a los que acompañarán las cartas de pago de la Caja general de Depósitos o sus sucursales de 10 por 100 de los tipos y serán admitidos hasta las dos de la tarde del día 10 de diciembre próximo en que se cerrarán sus operaciones por corresponder al domingo el siguiente que se señala para la subasta, recibiendo dichos pliegos en el día 11 hasta las once y media de la mañana en cuya hora se abrirán, adjudicándose el remate al mejor postor. Si resultase empate se pasará a la licitación oral sobre las proposiciones que lo motiven y entre sus autores durando hasta las doce.

3.º No se admitirá postura menor que la que marcan los anuncios, ni a sujeta que se considere deudor a los fondos públicos.

4.º El arriendo se entiende tan solo por frutos de la cosecha del año de 1869 a contar desde 1.º de enero hasta fin de diciembre en que vencieron los plazos de las rentas en frutos y metálico.

5.º Los arrendatarios otorgarán escritura de fianza en la forma que previenen las instrucciones tan luego como se les comunique la aprobación del contrato y sin exceder nunca del plazo de dos meses, y el pago lo harán por semestres adelantados y en monedas de oro y plata puestos en la Caja de esta Administración en su caso, cuando el arriendo llegue a 3.000 pesetas y por trimestres también adelantados y en igual forma no llegando a dicha suma.

6.º Los arrendatarios no tendrán derecho a pedir perdon o rebaja ni solicitar pagar en otros plazos ni en distinta especie que lo estipulado. El contrato ha de ser a suerte y ventura, sin opción a ser indemnizados por ningún incidente imprevisto.

7.º Los arrendatarios contraen la obligación de presentar relaciones de las

rentas que no pudiesen hacer efectivas con las despachos de apremio expedidos para su cobro y los justificantes necesarios a demostrar su insolvencia, bajo el principio de que si no lo hiciesen antes de vencer el último plazo del pago del arriendo, no tendrán derecho a indemnización de ningún género y por ningún concepto.

8.º Si no cumplieren la obligación de pago en los términos contratados, quedarán sujetos a la acción que contra ellos intente la Administración y a satisfacer los daños y perjuicios a que dieren lugar.

9.º Otorgada que sea la escritura, el arrendatario recibirá de la Administración el memorial cobrador de las rentas presupuestas que debe percibir, sin que por ningún pretexto pueda hacerse cargo de otras algunas que las que contenga dicho documento, pues si lo contrario hiciere incurrirá en responsabilidad, debiendo dar parte a la oficina de cuantas descubra en el acto de la cobranza y devolver a la misma el memorial cobrador al finalizar la época del arriendo, señalando en relación adjunta los nombres de los actuales pagadores o cabezaleros, y distinguiendo las que por no haberse identificado resulten reducidas con vista de las cartas de pago, cuyos números y fechas deberán citarse para la comprobación con los asientos de esta oficina.

10. Los arrendatarios harán la cobranza por medio de recibos talonarios que deben expresar el nombre de las dependencias de que procedan las rentas y el de los forales con designación de las medidas que satisfagan los contribuyentes, y el número de orden que la partida tenga en el memorial cobrador, quedando obligados a entregar las matrices de dichos recibos cuando hayan terminado su cobranza, como igualmente a su exhibición siempre que la considere necesaria esta oficina.

11. La Administración se entenderá únicamente para todos los efectos del contrato con el arrendatario principal, y de ninguna manera con sus delegados o subarrendatarios.

12. Los presupuestos al por menor de las especies y metálico de las rentas forales, se hallarán de manifiesto en las cabezas de los partidos administrativos en esta Administración y en la de Madrid los de mayor cuantía, o sean los de 5.000 pesetas inclusive en adelante.

13. Los arrendatarios no sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos a los Escribanos, Fieles de fechos y pregoneros, y el papel que se invierta en el expediente y escritura.

14. Los censos y rentas ocultas que con posterioridad a este arriendo llegaren a descubrirse por la Administración o por el arrendatario, serán objeto de la formación de un presupuesto para una nueva subasta previo el conocimiento y aprobación de la Dirección general del ramo.

15. Además de las condiciones expresadas, los arrendatarios quedarán sujetos a las que se hallen establecidas por las leyes adoptadas según la costumbre del país, siempre que estas no se opongan a las contenidas en este pliego.

Orense 29 de octubre de 1870.—P. A., Evaristo Velasco.

Delegación del Banco de España en Orense.

Habiendo vencido con exceso el término que se concedió por esta Delegación en 29 del próximo pasado para la cobranza de las contribuciones territorial y de subsidio de esta capital, y con el fin de evitar a los contribuyentes que aun no hubieren satisfecho sus cuotas respectivas los recargos reglamentarios, se amplie otro término hasta el 18 del presente, durante cuyo período se admitirán aquellas sin recargo por el recaudador

D. Mariano Sanchez en su casa, calle de Cervantes, núm. 7.

Orense 14 de Noviembre de 1870.—J. Luis de Baura.

Juzgado municipal de Boborás

D. Francisco Lahandeira, juez municipal del distrito de Boborás, hago saber: que hallándose vacante la secretaría de dicho juzgado, se anuncia su vacante para que todas las personas que se crean adornadas de las cualidades y actitud necesarias para su desempeño, presenten sus solicitudes en la secretaría de dicho juzgado en el improrrogable término de 15 días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia.

Juzgado municipal de Boborás Octubre 30 de 1870.—El Juez municipal, Francisco Lahandeira.—El Secretario interino, José del Puerto.

Ayuntamiento de Moreiras

Hallándose concluido el repartimiento que ha de regir para el presente año económico de 1870 a 71 de municipales, y espuesto al público por espacio de quince días, a contar desde la inserción de este en el Boletín oficial, pueden los comprendidos en él, venir a informarse de sus respectivas cuotas y reclamar de agravios.

Moreiras 10 de Noviembre de 1870.—E. A. P., Antonio Caquejo.

Ayuntamiento de Cartelle

Este Ayuntamiento, accediendo a solicitud hecha por algunos electores, acordó reducir a un solo colegio los cuatro que había dividido el distrito para las próximas elecciones, quedando establecido aquel en el pueblo de Oumuro y Casa consistorial. Lo que se anuncia al público a los fines legales.

Cartelle Noviembre 6 de 1870.—E. A., Celestino Armada.

Ayuntamiento de Villamea

Aprobado el repartimiento vecinal para atender a los gastos provinciales y municipales correspondiente al corriente año económico, se hace saber a vecinos y forasteros, concurren a la casa de don José Gil, vecino de la Costa, a verificar el pago de los dos trimestres vencidos, dentro del improrrogable término de 5 días, que se contarán desde el en que este anuncio aparezca inserto, pasados los cuales se parará el perjuicio de instrucción.

Villamea Noviembre 12 de 1870.—El Alcalde, Juan Bautista Montero.

Ayuntamiento de Celanova

Terminado el repartimiento para cubrir en parte los gastos provinciales y municipales por el año económico actual, se halla espuesto al público en la secretaría de este Ayuntamiento por término de seis días, que principiarán a contarse desde que tenga efecto la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, a fin de que los llamados a contribuir así, vecinos como forasteros, puedan enterarse de sus respectivas cuotas y hacer las reclamaciones que les convenga.

Celanova Noviembre 14 de 1870.—E. A. P., César Alvarez.

Ayuntamiento de Freix de Eiras

Los vecinos y forasteros de este distrito que no satisfagan sus respectivas cuotas de los dos trimestres vencidos del repartimiento general de los gastos provinciales y municipales del corriente año económico al recaudador D. José Seijo de Vilaboa desde el día 18 al 22 del

corriente mes, ahipos incluso, incurrirán en el apremio de primer grado, según las instrucciones para la de inmuebles, y en lo demás a que dieren lugar.

Freix de Eiras y Noviembre 14 de 1870.—El segundo Alcaide, Benito Alonso.—El Secretario, Enrique Rodriguez.

Ayuntamiento de la Merca

Este Ayuntamiento, accediendo a lo solicitado por D. Camilo Vazquez, vecino del pueblo de Zarracós, en 30 de Octubre último, acordó que los pueblos de la parroquia de Parderrubias con el de Vilar de la Merca, correspondientes al colegio de este nombre, formen una sola sección para las próximas elecciones: como asimismo y atendiendo a lo manifestado por D. Manuel Maria Borrajo y otros vecinos del pueblo de Proente, agregar este pueblo con el de Fuentefria de colegio de Zarracós al citado de Merca por ser los más inmediatos.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo prevenido por la ley. Al Merca 15 de Noviembre de 1870.—E. A., Alvaro Martinez.

Ayuntamiento de Coles

El repartimiento general de esta alcaldía y corriente año económico para satisfacer las obligaciones del presupuesto municipal y provincial, se hallará espuesto al público en los ocho días siguientes a la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, a fin de que los en él comprendidos puedan reclamar de agravio lo que crean conveniente en el referido término, sobre cualquiera error que se advierta en la proporcional distribución del impuesto sobre las unidades individualmente evaluadas.

Coles Noviembre 14 de 1870.—El Alcalde, Ramon Varela Rodriguez.

ANUNCIOS NO OFICIALES.

Ayuntamiento popular de Madrid

Del parte remitido en este día por la intervención del Mercado de granos y nota de precios de artículos de consumo, resulta lo siguiente:

Carne de vaca, del 12 a 13, 25 pesetas la arroba; de 0.58 a 0.65 la libra, y a 1.29 el kilogramo.
Idem de cordero, a 0.51 pesetas la libra, y a 1.33 el kilogramo.
Idem de ternera, de 1 a 1.25 pesetas la libra, y de 2.17 a 2.71 el kilogramo.
Tocino añejo, de 24 a 25 pesetas la arroba; a 1.06 la libra, y a 2.30 el kilogramo.
Idem fresco, a 20 pesetas la arroba, a 0.87 la libra y a 1.89 el kilogramo.
Jamón, de 22.50 a 23 pesetas la arroba; de 1.25 a 1.50 la libra, y de 2.71 a 3.25 el kilogramo.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid 13 de noviembre de 1870.—El Alcalde 1.º Fernando Hidalgo Saavedra.

Imp. de D. Gregorio Bionegro Lozano y C.º Plaza del Herrero núm. 31.

encia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

Art. 358. La inhibitoria se intentará ante el Juez municipal o el Tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime oportuno para que se inhiba y remita la causa.

Art. 359. La declinatoria se propone ante el Juez municipal o el Tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita al tenido por competente.

Art. 360. La inhibitoria y la declinatoria podrán ser propuestas:

En los negocios civiles, por los que sean citados ante Juez incompetente o puedan ser parte en el juicio promovido.

En los negocios criminales, por el Ministerio fiscal, por los acusadores cuando los procedimientos no se hayan comenzado a su instancia, por los procesados y los responsables civilmente del delito.

Art. 361. No podrá, en lo civil, proponer la declinatoria ni la inhibitoria el demandante que se hubiere sometido expresamente a la jurisdicción de un Juez o Tribunal, en los términos que establecen los artículos 303, 304, 305, 306 y 307 de esta ley.

Art. 362. Podrán proponer la inhibitoria o la declinatoria en lo criminal:

El Ministerio fiscal en cualquier estado de la causa.

El acusador privado sólo al presentarse como parte en la causa.

El procesado y el que sea considerado como parte civil en la causa sólo dentro del tercer día siguiente al de la notificación de la terminación del sumario.

Art. 363. El que hubiere optado por uno de los medios señalados en el artículo 357 no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplear ambos simultánea o sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquél a que hubiese dado preferencia.

Art. 364. El Juez municipal o Tribunal que se considere competente en lo criminal deberá en cualquier tiempo y en cualquier estado de la causa promover la competencia.

Art. 365. La inhibitoria se propone en escrito, que firmará un Letrado.

En el escrito expresará el que la proponga que no ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia o aunque él la abandone en lo sucesivo.

Art. 366. Los Jueces municipales y los Tribunales ante quienes se proponga la inhibitoria oírán al Ministerio fiscal cuando no fuere éste quien la hubiere propuesto. El Ministerio fiscal contestará dentro del tercer día.

Art. 367. Con vista de lo que diga el Ministerio fiscal, o sin ella, en los casos en que con arreglo al artículo que antecede no proceda, mandarán los Jueces o Tribunales librar oficio inhibitorio o declinatorio no habiendo lugar a hacerlo en otro caso.

Art. 368. Los autos en que los Jueces municipales denegaren el requerimiento de inhibición serán apelables en ambos efectos. Contra lo que en segunda instancia decidieren los Tribunales de instancia en lo civil y en lo criminal sólo habrá recurso de casación en su caso.

Art. 369. Los autos en que los Tribunales de partido denegaren en primera instancia el requerimiento de inhibición en materia civil serán apelables en ambos efectos.

Los autos en que lo denegaren en materia criminal no serán apelables, y sólo habrá contra ellos el recurso de casación en su caso.

Art. 370. Contra los autos de las Audiencias denegando el requerimiento de inhibición sólo habrá en su caso recurso de casación en lo civil y en lo criminal.

Art. 371. Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio del escrito en

que se haya pedido, de lo dispuesto por el Ministerio fiscal, de la providencia que se hubiere dictado y de lo demás que los Tribunales o Jueces estimen conducente para fundar su competencia.

Art. 372. El Juez o Tribunal requerido, cuando reciba el oficio de inhibición, oírán:

En los negocios civiles, a la parte o partes que hayan comparecido, y cuando no estuvieren estas de acuerdo con la inhibición, al Ministerio fiscal.

En las causas criminales, al Ministerio fiscal y al acusador privado si lo hubiere, y además cuando se hallare ya la causa en plenario al procesado o procesados a los que sean parte como responsables civilmente del delito.

Art. 373. Las comunicaciones de que trata el artículo anterior serán sólo por tres días, pasados los cuales sin devolverse los autos se recogerán de oficio con contestación o sin ella, y el Juez dictará auto inhibiéndose o negándose a hacerlo.

Art. 374. El auto en que se inhibieren los Jueces o Tribunales sólo será apelable en los casos establecidos en los artículos 368 y 369.

Art. 375. Consentida o ejecutoriada la sentencia en que los Jueces o Tribunales se hubiesen inhibido del conocimiento de un acto, pleito o causa, se remitirán los autos al Juez o Tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante él para usar de su derecho, y se pondrán a su disposición en las causas criminales, los procesados, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.

Art. 376. Si se negare la inhibición, se comunicará el auto al Juez o Tribunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los escritos de los interesados, del Ministerio fiscal y de lo demás que se crea conveniente.

Art. 377. En el oficio que los Jueces o Tribunales dirijan en el caso del artículo anterior exigirán que se les conteste para continuar actuando si se les deja en libertad, o que se remita la causa a quien corresponda para que se decida la competencia.

Art. 378. Recibido el oficio expresado en el artículo anterior, los Jueces o Tribunales que hayan propuesto la inhibitoria dictarán sin más sustanciación auto en el término de tercer día.

Art. 379. Los autos en que se inhibieren los Jueces o Tribunales sólo serán apelables en los casos establecidos en los arts. 368 y 369.

Art. 380. Consentida o ejecutoriada el auto en que los Jueces o Tribunales desistan de la inhibitoria, lo comunicarán al requerido de inhibición remitiéndole lo actuado ante el mismo para que pueda mandarlo unir a los autos.

Art. 381. Si los Jueces o Tribunales insistieren en la inhibitoria, la comunicarán a los que hubiesen sido requeridos de inhibición para que remitan los autos al Tribunal que corresponda haciéndole elos de lo actuado en su Juzgado o Tribunal.

Art. 382. Cuando los Jueces o Tribunales entre quienes se empeñe la cuestión de competencia, tuvieran un superior común, remitirán la causa y las actuaciones relativas a la misma cuestión.

Art. 383. Si los Jueces o Tribunales ejercieran jurisdicción de diversa clase, o desempeñaren sus cargos en territorios no sujetos a un superior común, remitirán los autos y actuaciones sobre la inhibitoria al Tribunal Supremo.

Art. 384. Las competencias se decidirán dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que el Ministerio fiscal hubiere emitido su dictamen.

Art. 385. Contra los autos de las Audiencias en que decidan cuestiones de competencia sólo se dará el recurso de casación en su caso.

Contra los del Tribunal Supremo no habrá ulterior recurso.

Art. 386. Los autos del Tribunal Supremo en que se decidan competencias se publicarán dentro de los 10 días siguientes a su fecha en la Gaceta, y a su tiempo en la Colección legislativa.

Los de las Audiencias en los Boletines oficiales de las provincias que comprenda su distrito dentro de los 15 días siguientes a su fecha.

Art. 387. El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria al Juez o Tribunal y a las partes que la hubieren sostenido o impugnado con notoria temeridad, determinando en su caso la proporción en que deban pagarlas.

Lo mismo podrán hacer las Audiencias respecto a los Jueces y Tribunales y a las partes en el caso expresado en el párrafo anterior.

Cuando no hicieren especial condenación en costas, se entenderán de oficio las causadas en la competencia.

Art. 388. Los Tribunales que hayan resuelto la competencia remitirán la causa a las actuaciones que hubiese tenido a la vista para decidirla, con certificación del auto, al Tribunal o Juez declarados competentes, y cuidarán de que se haga efectiva la condenación en las costas que hubieren impuesto, librando al efecto las órdenes oportunas.

Art. 389. Cuando la cuestión de competencia empeñada entre dos o más Tribunales o Jueces fuere negativa por rehusar todos entender en una causa o pleito, la decidirá el superior común o el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para ello los mismos trámites prescritos para las demás competencias.

Art. 390. Las cuestiones de jurisdicción promovidas por Jueces o Tribunales seculares contra Jueces o Tribunales eclesiásticos se sustanciarán y decidirán con sujeción a las reglas establecidas para los recursos de fuerza en conocer.

Art. 391. Cuando los Jueces o Tribunales eclesiásticos estimaren que les corresponde el conocimiento de una causa en que entiendan los Jueces o Tribunales seculares, podrán requerirles de inhibición, y si no se inhibieren, recurrir en queja al superior inmediato de estos; el cual, después de oír al Ministerio fiscal, resolverá lo que creyere procedente.

Contra esta resolución no se dará recurso alguno.

Art. 392. Las declinatorias se sustanciarán en la forma que establezca para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civil. Contra los autos que pronuncien las Audiencias, sólo se dará en su caso el curso de casación.

Art. 393. Las inhibitorias y las declinatorias propuestas en las causas criminales durante el sumario no suspenderán su curso, el cual se continuará por el orden que se expresa en los números siguientes.

1.º Cuando hubiere conformidad sobre el lugar en que se cometió el delito, por el Tribunal o Juez que lo sea de él.

2.º Cuando no hubiere dicha conformidad, por el que hubiere comenzado antes a actuar.

3.º Cuando hubieren principiado ambos en una misma fecha, por el Tribunal o Juez requerido de inhibición.

Art. 394. Las inhibitorias y las declinatorias en los negocios civiles y en las causas criminales durante el plenario suspenderán los procedimientos hasta que se discuta y decida la cuestión de competencia.

Durante la suspensión, el Tribunal o Juez a quien corresponda, según los casos establecidos en el artículo anterior, practicará cualquiera actuación que sea absolutamente necesaria, y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables, ya sea de oficio, ya a instancia de cualquiera que tenga un interés legítimo.

Art. 395. En el caso de competencia

negativa en las causas criminales entre la jurisdicción ordinaria y otra privilegiada, la ordinaria empezará o continuará la causa.

Art. 396. Cuando la competencia fuere entre Tribunales y Jueces que ejerciesen una misma clase de jurisdicción, empezará o continuará la causa:

1.º El Juez del lugar en que se cometió el delito, si en ello hubiese conformidad.

2.º No habiendo conformidad respecto al lugar donde se cometió el delito, el primero que hubiere empezado a actuar, y si tampoco en este punto hubiese conformidad, aquel ante quien se hubiese presentado querrela o denuncia.

En los casos en que no sean aplicables las reglas anteriores, deberá continuarse la causa por el Juez que hubiese promovido la competencia negativa.

Art. 397. Para la decisión de toda competencia en lo criminal, el Tribunal o Juez que deba continuar conociendo de la causa remitirá al superior inmediato, cualquiera que sea el estado en que la competencia se empeñare, testimonio de las actuaciones relativas a la inhibitoria y de lo demás que sea conducente en apoyo de su intención, reteniendo la causa para su continuación si se hallase en sumario.

El Tribunal o Juez que no deba continuar actuando remitirá original la causa, y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas a la inhibitoria.

Art. 398. Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta la decisión de las competencias serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez o Tribunal que sea declarado competente.

CAPITULO V.

De los recursos de fuerza en conocer.

Art. 399. El recurso de fuerza en conocer procederá cuando un Juez o Tribunal eclesiástico conozca o pretenda conocer de una causa no sujeta a su jurisdicción, o llevar a ejecución la sentencia que hubiese pronunciado en negocio de su competencia, procediendo por embargo y venta de bienes sin impetrar el auxilio de la jurisdicción ordinaria.

Art. 400. Podrán promover el recurso de fuerza en conocer:

1.º Los que se consideraren agraviados por la usurpación de atribuciones hecha por un Juez o Tribunal eclesiástico.

2.º Los Fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo.

Art. 401. Los Fiscales municipales, los de Tribunales de partido, los Jueces y los Tribunales de la jurisdicción ordinaria no podrán promover directamente recursos de fuerza en conocer.

Cuando supieren que alguna Autoridad judicial eclesiástica se haya entrometido a entender en negocios ajenos a su jurisdicción, se dirigirán a los Fiscales de las Audiencias o al del Supremo, según sus atribuciones respectivas, dándoles las noticias y datos que tuvieren para que puedan promover el recurso si lo estimaren procedente.

Art. 402. Los que considerándose agraviados por un Juez o Tribunal eclesiástico quisieren promover el recurso de fuerza en conocer, lo propondrán en los términos que prescribe esta ley.

Art. 403. El Ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y sin preparación alguna.

Art. 404. El agraviado preparará el recurso ante el Juez o Tribunal eclesiástico, solicitando en petición fundada que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos o las diligencias practicadas al Juez o al Tribunal competente, protestando si no lo hiciere impetrar la real protección contra la fuerza.

Art. 405. Cuando el Juez o Tribunal eclesiástico denegare la pretensión hecha con arreglo al artículo anterior, podrá el agraviado pedir testimonio de la provi-